

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 47
O R D I N A R I A
LUNES 2 DE MAYO DE 2016

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta y ocho minutos del lunes dos de mayo de dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta y seis ordinaria, celebrada el jueves veintiocho de abril del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el lunes dos de mayo de dos mil dieciséis:

I. 9/2016-AI

Recurso de reclamación 9/2016-AI, derivado de la acción de inconstitucionalidad 17/2016, promovida por el partido político MORENA. En el proyecto formulado por la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández se propuso: *“PRIMERO. Es infundado el presente recurso de reclamación. SEGUNDO. Se confirma el auto dictado por el Ministro Instructor, en la acción de inconstitucionalidad 17/2016”*.

La señora Ministra Luna Ramos observó que se podrían reiterar las votaciones dadas al recurso de reclamación 8/2016-AI.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra del proyecto porque, tal como se pronunció en la sesión pasada y desde el año dos mil ocho, no se trata de una causa notoria y manifiesta de desechamiento de la demanda por la que se impugnan reformas constitucionales, puesto que ni por la denominación de leyes que está en el artículo 105, fracción II, inciso f) constitucional ni por la condición orgánica —el órgano de reformas a la Constitución es complejo, compuesto por varios órganos simples— se impide que se impugnen sus determinaciones, además de que, en el caso concreto, se están impugnando violaciones en el proceso legislativo, al no satisfacerse las condiciones previstas en los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea invocó las razones dadas en el precedente citado, para estar en contra

del presente proyecto, por lo que solicitó que se tuvieran por reproducidas.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena coincidió con los señores Ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea, pues no existe razón alguna para el desechamiento por un motivo manifiesto e indudable, siendo que en este asunto resulta más claro al impugnarse al proceso de reforma constitucional, no una cuestión sustantiva.

El señor Ministro Pardo Rebolledo anunció voto a favor del proyecto, observando que en la demanda no se alegaron violaciones al procedimiento de reformas a la Constitución en relación con el artículo 135, sino que sólo reclamaron otras cuestiones denominadas “violaciones al procedimiento”, en cuanto al apresuramiento en el procedimiento, a que no se tomó en cuenta la paridad de género, y a que no se escuchó a los pueblos originarios del Distrito Federal, entre otras, que no guardan relación con los requisitos que establece el citado artículo 135.

El señor Ministro Franco González Salas recordó que se ha pronunciado en el sentido de que, en principio, no procede la acción de inconstitucionalidad en contra de violaciones al procedimiento de reformas constitucionales, considerando que el Constituyente dejó ese ámbito al Congreso de la Unión para definir las condiciones de aprobación de la reforma constitucional, salvo que hubiese un rompimiento del orden constitucional, es decir, se viole el artículo 135 directamente. En el caso, estimó que los

planteamientos hechos en la demanda no se encaminan a ello y, por tanto, anunció su voto en favor del proyecto.

La señora Ministra ponente Piña Hernández apuntó que en el quinto concepto de violación y en el tercer agravio, el partido adujo una violación al procedimiento; sin embargo, y como lo señaló el señor Ministro Pardo Rebolledo, únicamente se refiere a la rápida aprobación y a cuestiones de equidad de género, lo cual no implica propiamente una violación al procedimiento respectivo. En ese tenor, sostuvo el proyecto, por las razones aducidas en el recurso de reclamación anterior, en el sentido de que, en el caso, se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia.

La señora Ministra Luna Ramos reiteró su voto del asunto anterior, aclarando que, aun en el caso de que se impugnen cuestiones procesales, la Constitución no otorga al Poder Judicial de la Federación participación alguna en relación con el procedimiento de reforma constitucional, por lo que se trata de una causa notoria y evidente de desechamiento.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales señaló que, en relación con la posibilidad de impugnar una reforma constitucional en virtud de los vicios del procedimiento legislativo y como regla general, los medios de control constitucional, salvo disposición expresa en contrario contenida en la propia Constitución, son improcedentes, siendo que, de aceptarse la posibilidad de que la acción de inconstitucionalidad sea procedente para impugnar reformas

a la Norma Fundamental, se desconocería que en el artículo 105 de la Constitución con toda claridad se prevé que ese medio de control únicamente procede para impugnar la constitucionalidad de normas generales inferiores a la Constitución, lo cual se corrobora al analizar los supuestos contenidos en su fracción II, incisos a) al i), que claramente se refieren a disposiciones generales de rango inferior a la Constitución, aun cuando se mencionan a las leyes, si bien la Constitución se puede considerar como una ley, el sentido del precepto es que sean leyes que no sean la Constitución, ya que la confronta se hace precisamente contra el texto constitucional.

Abundó que esta limitante al ámbito de impugnación de la acción de inconstitucionalidad además se justifica porque dicho medio de control no cuenta con los mecanismos procesales que permitan atemperar las graves consecuencias de someter a control constitucional una reforma constitucional, dado que, por la trascendencia de ésta y al erigirse como parámetro de control de la constitucionalidad de todas las conductas asumidas por quienes se sujetan al orden jurídico del Estado Mexicano, un medio de control de este tipo de actos requeriría de regulación que atendiera esa particularidad y, por ende, permitiera la impugnación de una reforma constitucional antes de que entrara en vigor, bien fuera con motivo de su aprobación por el Congreso antes de su valoración por las Legislaturas locales o mediante un diverso mecanismo que impidiera generar una grave inseguridad jurídica.

Recapituló que el Poder Revisor de la Constitución, tal como se difundió en el Semanario Judicial de la Federación en la tesis que sintetiza el criterio respectivo, en las tres ocasiones que ha reformado el artículo 105, fracción II, constitucional —decretos de dos mil once, dos mil catorce y dos mil dieciséis—, no ha modificado ese numeral para admitir la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales, por lo que no es procedente para impugnar reformas a la Constitución, con independencia de que, en la demanda respectiva, se hubieran planteado violaciones al procedimiento regulado en el artículo 135 de la propia Norma Fundamental.

Aclaró, sin comprometer criterio al respecto, que quizás podría existir una posibilidad para que resulte procedente ese medio de control, a saber, en casos excepcionales donde se advierta la violación absoluta al artículo 135 constitucional, en aras de que prevalezca el principio de supremacía constitucional. No obstante, en el caso concreto, no advirtió la existencia o planteamiento de un procedimiento que no se haya apegado a lo dispuesto en el artículo 135, pues en los argumentos desarrollados en el quinto concepto de invalidez —visible en las fojas ciento tres a ciento treinta y tres de la demanda respectiva— se advierte que el partido accionante se limitó a plantear que el referido artículo 135 no se respetó, señalando que la reforma se aprobó con apresuramiento y que en la Cámara de Diputados se aprobó por trescientos veintinueve votos agregar una propuesta en materia de equidad de género, la cual no se plasmó en el

texto finalmente aprobado, siendo que esos vicios no son propiamente violaciones al procedimiento, además de que la citada propuesta en materia de equidad de género, consistió en una reserva presentada por una diputada, cuyo análisis no se aceptó. Por tanto, se manifestó a favor del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del proyecto, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas separándose de algunas consideraciones, Pardo Rebolledo separándose de algunas consideraciones, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea con precisiones, votaron en contra y anunciaron sendos votos particulares. El señor Ministro Medina Mora I. anunció voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

II. 250/2015

Contradicción de tesis 250/2015, suscitada entra la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por una parte, los recursos de inconformidad 61/2014 y 237/2014 y, por la otra, el recurso de inconformidad 45/2015. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso:

“PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en los términos del considerando cuarto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo. TERCERO. Dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo”. La tesis a que se refiere el punto resolutivo segundo tiene por rubro: *“RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO SINO SÓLO CONTRA AQUÉLLA QUE LA DECLARA SIN MATERIA O INFUNDADA”.*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación del denunciante y a los criterios de las Salas contendientes, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos cuarto, relativo a

la existencia de la contradicción de tesis, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo. Precisó que el objeto de la presente contradicción es determinar la procedencia del recurso de inconformidad contra la determinación que declara improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado, a partir de lo establecido en la Ley de Amparo vigente. El proyecto señala la materia y el objeto del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, sosteniéndose que se advierte que el recurso de inconformidad procede, entre otros supuestos, contra la resolución que declare infundada o sin materia la denuncia de repetición del acto reclamado, siendo que, a través del recurso de inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado, solamente es factible examinar la legalidad de la resolución del juez de distrito o del tribunal colegiado que declare infundada o sin materia dicha denuncia, para verificar si la autoridad responsable realizó un acto con idéntico sentido respecto del acto por el que se concedió el amparo; sin embargo, el recurso es improcedente en tratándose de resoluciones que, a su vez, declaran improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado, puesto que éste sólo puede centrarse en la

afectación exclusiva del quejoso y en el pronunciamiento respecto de la existencia de repetición del acto reclamado, ya que si el tribunal de amparo no se pronunció sobre la repetición de dicho acto en la resolución impugnada, los tribunales colegiados o esta Suprema de Justicia, en el ámbito de sus respectivas competencias, tampoco podrían decidir tal aspecto.

Por lo anterior, se considera que el artículo 201, fracción III, de la Ley de Amparo debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad, siendo que, de aceptar otro tipo de resoluciones en las que un tribunal colegiado o un juez de distrito no se hayan pronunciado sobre la alegada repetición, desnaturalizaría la finalidad del precepto legal, dándose entrada a determinaciones que el legislador expresamente excluyó. En ese sentido, se propone que la tesis que debe prevalecer consiste en que el recurso de inconformidad solamente es procedente en contra de las resoluciones con base en los supuestos que, de manera expresa, señala el artículo 201, fracción III, de la Ley de Amparo.

La señora Ministra Luna Ramos se pronunció en contra del proyecto porque el artículo 201, fracción III, de la Ley de Amparo cita “El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado;”, con lo cual la Primera Sala determinó que no procede el recurso de

inconformidad contra la improcedencia de la denuncia de repetición de acto reclamado, siendo que, por el contrario, la Segunda Sala determinó que procede el recurso de inconformidad en contra de la improcedencia de la denuncia de repetición de acto reclamado, dado que, en el caso que analizó, había sido desechada por improcedente por el tribunal colegiado respectivo, estableciendo el criterio mayoritario en el sentido de que, al permitirse en el citado precepto el análisis de la procedencia de este recurso, implica el análisis previo de la procedencia y, entonces, cuando se declara por el tribunal colegiado esta improcedencia, la idea es analizarla a través de la competencia —que no es clara— que se le otorga a esta Suprema Corte para analizar el fondo. Por esas razones, se reiteró en contra del proyecto, y en favor del criterio mayoritario de la Segunda Sala.

El señor Ministro Pérez Dayán también se expresó en contra del proyecto, aclarando que el tema es opinable, pues todo participa de la expresión “improcedente”, la cual no es unívoca, sino que, en ocasiones, se utiliza para indicar que es infundado, a veces para declarar la inoperancia de algún argumento, o hasta para lo que es inatendible. En el caso concreto, el diferendo entre las Salas radica en que, para la Segunda, el precepto agrega un supuesto en el cual la inconformidad resulta el medio para cuestionar la decisión de declarar improcedente una denuncia de repetición del acto reclamado, siendo que si el término es multívoco, esta interpretación se sitúa como la mejor herramienta para

otorgar seguridad jurídica, esto es, que el supuesto en cuestión también se encuentra incluido en el texto del artículo, para permitir que, aquél que se encuentre inconforme con una determinación en relación con la repetición del acto reclamado, pueda promover recurso de inconformidad.

Estimó que también pudiera considerarse que, si no es la inconformidad el instrumento que la Ley de Amparo ha establecido para cuestionar esta circunstancia, se encuentra la queja, interpretando también el artículo 97, fracción I, inciso e), el cual la prevé para cualquier otro caso que no sea de revisión, dictado después del cumplimiento de la ejecutoria.

Apuntó que es común encontrar casos como el presente, y recordó que en la anterior Ley de Amparo se establecían tres recursos: reclamación, queja y revisión, siendo que la nueva Ley agrega la inconformidad. Bajo esa perspectiva, también recapituló que, en tratándose de la interpretación de los recursos, se ha asociado la figura más próxima, como sucedió con el tema de la suspensión que fijaba requisitos que no satisfacían al quejoso o con el desechamiento parcial de la demanda, que no era un supuesto específico de la Ley de Amparo pero, por vía de la aproximación, se encontró la solución para definir cuál era el recurso que más se acercaba a la naturaleza misma de la violación que se cuestionaba.

Así, y valorando que se trata del cumplimiento de una sentencia, que incluso es de orden público, estimó que no se puede atender al estricto criterio literal de la disposición, y entender que la inconformidad no procede, puesto que, por el contrario, en realidad es el instrumento que está creado para revisar la legalidad o conformidad jurídica de este tipo de decisiones. Por ello, siguió el criterio de la Segunda Sala, privilegiando la interpretación más favorable, por lo que la solución debe permitir la inconformidad en el supuesto que se analiza. Por tanto, se manifestó por sostener el criterio contrario al propuesto en el proyecto.

El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto en contra, como lo hizo en la Primera Sala al resolver los recursos de inconformidad 61/2014 y 237/2014, en una posición muy semejante a la externada por los señores Ministros Luna Ramos y Pérez Dayán, por lo que no abundaría en las razones dadas en su voto particular emitido en dichos asuntos.

La señora Ministra Piña Hernández se posicionó en favor del proyecto por tres razones: 1) que, en el caso, el auto que se recurre implica un desechamiento del incidente de repetición del acto reclamado por improcedente, es decir, no se estudia el fondo, sino que únicamente se van a ver cuestiones de legalidad, siendo que el artículo 201, fracción III, de la Ley de Amparo específicamente indica que la teleología de ese recurso es examinar el fondo del asunto; 2) que, como lo dijo el señor Ministro Pérez Dayán, existe el

recurso de queja en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo para verificar si se da o no la procedencia, por ejemplo, si está interpuesta en tiempo, si está legitimada la parte, o alguna otra cuestión de mera legalidad, que no implique un pronunciamiento de fondo, por medio del cual el superior jerárquico podría analizar estrictamente los supuestos y requisitos de procedencia; 3) que, si la queja resulta procedente, llevaría al juez a analizar el fondo de la denuncia de repetición del acto reclamado, siendo que, tras pronunciarse sobre el fondo, existiría el recurso de inconformidad para analizar, en segunda instancia, el fondo del asunto.

Por tanto, compartió el proyecto, y sugirió que se precise que procedería en el caso el recurso de queja, el cual se advierte de la propia sistematización de la Ley de Amparo, para no generar inseguridad jurídica.

El señor Ministro Franco González Salas reiteró la posición que adoptó en la Segunda Sala, a saber, en favor del criterio mayoritario.

El señor Ministro Pérez Dayán aclaró haber apuntado que la alternativa podría ser la queja contenida en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo que, de manera genérica, contempla la posibilidad de cuestionar cualquier otra resolución que no sea combatible mediante el recurso de revisión; pero la dificultad de ello radicaría en que habrá quienes piensen que se podría combatir a través de la inconformidad, por lo que no se surtiría el supuesto.

Advirtió que la redacción de la nueva Ley de Amparo presenta una dificultad importante en cuanto al recurso de queja, pues no establece quién conoce de éste, por ejemplo, siendo que se han interpretado diversos supuestos como, en caso de que se presente una queja por una actuación de la autoridad responsable, conocerá el juez y, si se presenta por lo declarado por un juez, lo conocería el tribunal colegiado y, de ser éste la materia de la queja, estará a consideración de esta Suprema Corte. Adelantó que esto, eventualmente, podría ser motivo de alguna reforma legislativa para crear un sistema de competencias en cuanto a quién le correspondería conocer de la queja y en qué términos podría hacerlo.

La señora Ministra Luna Ramos concordó en que el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo se ha tomado como el cajón de sastre para la procedencia del recurso de queja; sin embargo, el mismo precepto 97 precisa que procedería en amparo indirecto, no en el directo, siendo que los asuntos que se han analizado son derivados de amparos directos.

Acotó que esta Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para conocer del recurso de queja, sino el tribunal colegiado. Por ello es que en la Segunda Sala se estimó procedente la inconformidad en cuanto al fondo del problema, y si bien son plausibles las razones de la señora Ministra Piña Hernández respecto de que sólo debe conocer esta Suprema Corte cuando la inconformidad se refiera al

fondo, ello conllevaría el problema de dejar al tribunal colegiado la determinación de que sea improcedente, siendo que no se cuenta con disposición expresa del recurso que va a proceder en contra de esta determinación. Resaltó que, si bien podría entenderse procedente la queja tratándose de un problema de repetición de acto reclamado en juicio de amparo indirecto, respecto de la cual conocerá el tribunal colegiado de circuito, cuando se trate de la repetición de acto reclamado en juicios de amparo directo, la queja no tiene posibilidades de ser procedente y, por esa razón, la Segunda Sala estimó que esta Suprema Corte tiene competencia, por virtud del artículo 201, fracción III, de la Ley de Amparo, para conocer de la inconformidad en el fondo pues, quien puede lo más, puede lo menos, en aras de no dejar en estado de indefensión ante la obligación del cumplimiento de las sentencias.

La señora Ministra Piña Hernández estimó que debería diferenciarse, para la procedencia del recurso de inconformidad, entre amparo indirecto y amparo directo, para que no quede el criterio de forma general porque, efectivamente, el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo trata acerca del indirecto. Apuntó que el diverso artículo 98 uniforma al decir que debe presentarse el recurso de queja ante el juez de distrito y en el plazo de cinco días, con las excepciones que el propio precepto establece, por lo que, tratándose de amparo indirecto, procedería el recurso de queja; y, tratándose del amparo directo, para no dejar en estado de indefensión a los particulares, podría aceptarse

esa solución, pero no como criterio general, sino haciendo la división de las vías.

El señor Ministro Medina Mora I. se manifestó conforme con el criterio mayoritario de la Segunda Sala, tal como emitió su voto al resolver el recurso de inconformidad 1274/2015 y que fue de su ponencia, por lo que se pronunció en contra del proyecto. Estimó pertinente la aclaración de la señora Ministra Luna Ramos en torno al artículo 97, coincidiendo en que sólo resulta aplicable en amparo indirecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se inclinó en contra del proyecto porque, si bien de una lectura estricta del artículo 201, fracción III, de la Ley de Amparo pudiera advertirse que el recurso de inconformidad procede sólo en contra de resoluciones que declaren infundada o sin materia la denuncia de repetición del acto, ello no necesariamente implica que dicho recurso únicamente sea procedente cuando la resolución recurrida, *contrario sensu*, contenga un pronunciamiento de fondo, en el que se defina si existió o no la repetición del acto reclamado, porque en los casos en que se declara sin materia el incidente de repetición del acto reclamado, la decisión puede derivar en cuestiones ajenas al tema de fondo, por ejemplo, cuando la autoridad responsable deja sin efectos el acto acusado de repetitivo, con lo cual se hace patente la posibilidad de interponer el recurso de inconformidad en contra de resoluciones que no necesariamente abordan la cuestión de fondo relativa a

determinar si, en el caso, se actualizó o no la repetición del acto reclamado.

Aclaró que su posición no implica agregar un supuesto más a los previstos en la norma, sino interpretar el artículo de forma favorable al particular, pues se trata de determinaciones que tienen la misma consecuencia que aquellas que la declaran sin materia, ya que ambas impiden que el órgano jurisdiccional de amparo se pronuncie en torno a la verificación del acto repetitivo, además de que la postura del proyecto podría dar lugar a que las resoluciones que declaran improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado tuvieran el carácter de irrecurribles, por ejemplo, en caso de que se trate de un amparo directo —como ya se ha explicado—.

Hizo hincapié en que los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo apuntan a que la posibilidad de denunciar la repetición del acto reclamado se encuentra orientada a garantizar al quejoso la restitución real, permanente y definitiva en el goce de los derechos fundamentales que le fueron violados con el acto reclamado, así como establecer, a través de un procedimiento contradictorio, la responsabilidad de la autoridad que insista en la ejecución del acto inconstitucional, por lo que, interpretando sistemáticamente los artículos 199, 200, 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, es posible determinar que el recurso de inconformidad también procede en contra de las resoluciones que declaren improcedente la denuncia de

repetición del acto reclamado, lo cual resulta congruente con el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional. Por estas razones, se posicionó en contra de la propuesta.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo sostuvo el proyecto, recalcando que las hipótesis de procedencia del artículo 201 de la Ley de Amparo son restrictivas, puesto que establece con detalle las determinaciones sobre las cuales procede el recurso de inconformidad, para lo cual dio lectura integral de la siguiente forma: “Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.”.

Con lo anterior, afirmó que esa es la lógica que guarda el citado precepto, lo cual, independientemente de considerarse acorde o no con el principio de acceso a la justicia o de un recurso efectivo, no se trata de un análisis constitucional o convencional del artículo, sino que, como está redactado, es claro que es restrictivo.

El señor Ministro Laynez Potisek recordó que, en febrero de dos mil dieciséis y ya como integrante de la Segunda Sala, votó en favor del criterio mayoritario, en el

sentido de que procede el recurso de inconformidad, puesto que, de lo contrario, se generaría un estado de indefensión e inseguridad jurídica; por eso, se pronunció en contra del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, respecto de la cual se expresó una mayoría de siete votos en contra el proyecto por parte de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo y Piña Hernández votaron a favor.

Por tanto, dado el resultado de la votación mayoritaria en contra de la propuesta del proyecto, el Tribunal Pleno determinó desechar el proyecto y returnar el asunto a un Ministro que no integre la minoría que se pronunció a favor del proyecto, conforme al turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, en la inteligencia de que dicho retorno se computará como un turno para efectos estadísticos.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cuarenta y tres minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el martes tres de mayo del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

"En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".